



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 23 - (3ra. época)

EDICIÓN ESPECIAL

14-08-2020

HAY QUE ROMPER LA DEPENDENCIA

ORGANIZAR

LA LUCHA

PARA

NO PAGAR

LA DEUDA

Acuerdo con los bonistas: nada para festejar

Pág. 10

Proyecto comercial con China

Pág.17

Quema de humedales: el modelo productivo

Pág.28

Fuera Añez ¡Viva la lucha del pueblo boliviano!

Pág.42

Editorial

Deuda: un acuerdo contrario a los intereses del pueblo

Finalmente se concretó el acuerdo con los bonistas, no hubo default y la nota destacada fueron los festejos en el gobierno a la par del reconocimiento por parte de CEOs y ex funcionarios macristas. Se sumaron otros jerarcas institucionales, empresarios, ruralistas, sindicales, clericales y también los medios hegemónicos. Ahí no hubo grietas. En contraste, en fábricas y barriadas, están los azotes del covid-19, el esfuerzo para sostener las ollas, los despidos y las suspensiones: no había lugar para festejos. Por el contrario, decepción y bronca, porque la deuda, repetidamente denunciada por dirigentes del Frente de Todos como una estafa, fue ratificada en su licitud y en condiciones altamente beneficiosas para los usureros. Son U\$S 16.000 millones más desde que se inició la negociación en marzo, y en lugar de 3 años de espera serán solo 6 meses. El compromiso de pago distorsionó toda aspiración de cambio real y está en abierta contradicción con la independencia económica y la justicia social. Fue un quiebre difícil de asimilar en sectores del progresismo y en franjas de base peronistas, realmente interesados en avanzar con las tareas de liberación.

Decisión inicial por parte del gobierno que habilita el arreglo con el FMI, que operó fuerte en apoyo al ministro Guzmán. No solo pretenden recuperar los U\$S 44.000 millones entregados al macrismo en 2018, sino también las reformas estructurales en lo laboral, lo previsional y lo tributario, acordadas de hecho con los gordos de la CGT y otros altos funcionarios. Las flexibilidades pospandemia del capitalismo globalizado empujan en tal sentido y derivan el costo de la crisis sobre el proletariado y los pueblos. Dependerá de la repuesta popular y de sus niveles insurreccionales, hasta donde dichas políticas de saqueo y precarización podrán estabilizarse. Detrás del Fondo esperan el Club de París, el Banco Mundial y otros acreedores, atentos a la conducta enaltecida oportunamente por la ex presidenta como pagadores seriales, en lugar de cumplir con la deuda interna tantas veces bastardeada.

Covid, pobreza y FMI

Si bien queda más claro el proyecto del peronismo actual, comparado con los intereses de la gran burguesía parasitaria que representó el gobierno de Mauricio Macri, el aspecto renegociador de la dependencia que caracterizó al kirchnerismo en los inicios de la década aparece totalmente diluido. Su política de endeudamiento y flamante amistad con el Fondo responde al proceso de rechazación en su conjunto independientemente del currículum liberal que arrastra Alberto Fernández. En

dicho marco no hay margen para tareas nacionales o antiimperialistas y menos aún para la justicia social que proclama el Justicialismo. Sin políticas que afecten de raíz el privilegio, lo que queda es un variopinto concentrado en gestionar la pobreza pero que nunca avanzará sobre la riqueza. Hay diferencias políticas con el proyecto anterior, pero sin gestas ni causas nobles “la patria NO es el otro”. Con el acuerdo se reafirma el carácter dependiente del capitalismo monopólico que caracteriza nuestro país, con las consecuencias económicas que condenan a vivir en la pobreza a millones de argentinos. Allí están los datos de Unicef confirmando que el 63% de los niños al cierre del año serán pobres. ¿A quién se pretende convencer de que la claudicación en el pago a los fondos y grupos financieros supone un futuro luminoso para nuestros jóvenes?

En plena pandemia y cuando la curva ascendente de contagios busca su pico, los problemas económicos y de vida del pueblo son insostenibles. La cuarentena ha sido desbordada en los hechos y por encima de las víctimas fatales, ha quedado al desnudo la precariedad de la salud pública, más allá de los esfuerzos y abnegación del personal sanitario. Mucho más la precariedad laboral y la falta de perspectivas, visto que las prioridades del gobierno fueron puestas en la recomposición de los buenos vínculos con el poder de las multinacionales. Se espera una caída del 9% del PBI, y en el mejor de los casos suponiendo un rebote para el 2021 del 5%, todavía los niveles de recuperación serían

negativos. La emisión monetaria desbordante (\$ 1,8 billones a la fecha) se justifica para enfrentar la pandemia pero su continuidad conlleva el riesgo de hiperinflación. El dólar paralelo muy distante del oficial, también empuja en ese sentido y se pone a tiro de mayor especulación. La recesión no tocó piso, y si bien el arreglo con los bonistas despeja transitoriamente el horizonte, un nuevo préstamo del FMI -como viene trascendiendo- será posible solo con un ajuste mayor.

Otra vez el cuento del acuerdo social

El gobierno esboza pospandemia un acuerdo social que permita negociar precios y salarios y recomponer el consumo interno. Nada nuevo ni motivante. Cada vez que se instrumentó algo parecido, los salarios “fueron por la escalera y los precios por el ascensor”. Sin voluntad para hacer cumplir el decreto en el que se prohibían los despidos o bien el recupero de los recursos malversados por Vicentin, no hay razones para pensar que será distinto ante los formadores de precios o aquellas grandes patronales que aprovechan el covid-19 para descontar salarios o violar protocolos de seguridad. El acuerdo firmado con la CGT les dio impunidad a las patronales, que aprovechan a la vez para reafirmar su integración al pacto social requiriendo continuidad en los ATP, desgravaciones y flexibilidades en los convenios. Por otro lado está la complicidad de las CTA, que han dejado a la deriva a los estatales, sobre todo en el interior, y sin puja por salario.

No es cierto que la crisis afecta a todos por igual. El argumento de que los salarios producen inflación quedó refutado en los hechos durante todos estos años. La continuidad de la misma concepción no hace más que descalificar a los referentes gremiales sentados en la mesa de Olivos. Con paritarias inexistentes en algunos casos y con aumentos a la baja en otros. Cualquier intento de poner techo a los salarios, amparados en la crisis o en los daños de la pandemia, ratifica la vigencia de políticas neoliberales, más aun si se considera que el 70% de los trabajadores en blanco cobran por debajo de una canasta básica completa (\$43.000) y a la par de ellos 5 millones de trabajadores informales reciben mucho menos.

En el caso de la gran empresa como Techint, acostumbrados a imponer condiciones, despidos y/o rebajas salariales en nivel del 50%, en este caso, los acuerdos van relacionados a financiamientos con la banca internacional. De allí su entusiasmo en el arreglo con los bonistas, que mejoran sus posibilidades de retomar exportaciones siderúrgicas, a la par de condicionar la política petrolera. Justamente Tecpetrol de su pertenencia, es una de las que más presiona, junto a Vista de Galucio e YPF, para que se liberen precios y se apliquen los anunciados aumentos en naftas y gasoil.

Con sectores del campo, en la misma matriz productiva

En otra línea de acción y con el apoyo explícito de

Cristina, se apuran reuniones con el Consejo Agro-industrial Argentino (CAA) para elevar la capacidad exportadora. Con presencia del Centro de Exportadores de Cereales, Cámara Aceitera, Molinera, Aviar, etc. se acordó promulgar para antes de fin de año una ley de estímulos y desgravaciones a efectos de aumentar la producción agropecuaria al doble de la actual en el término de 10 años. Dicho compromiso, asumido también por referentes de Cambiemos, reafirma políticas de estado preexistentes. Allí están parte de las divisas destinadas al pago de la deuda externa. Por eso las expresiones presidenciales sobre la “vaca viva” en alusión comparativa con la situación incierta que presenta el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. Intención que cierra toda posibilidad de cambios en la matriz productiva y contradice a su vez las expectativas generadas en el progresismo, tanto como la expulsión de Monsanto, la preservación de humedales, la soberanía alimentaria, etc. Tampoco desentona con este rumbo el proyecto de explotación porcina con China. Explica sí el paso atrás con Vicentin, la preservación del statu quo con las multinacionales en el comercio exterior, y más aún el no poner en cuestión el régimen de propiedad de la tierra.

Administrando la pobreza

Si los recursos no salen de arriba, porque no hay intención de afectar la estructura de poder gestada por el capital monopólico, entonces todos los esfuerzos de la gobernabilidad estarán puestos en

administrar y hacer más “suave” la pobreza. Desde 2011 no se generan puestos de trabajo genuinos ni se habla de inversiones concretas industriales, energéticas, generadoras de valor agregado, etc como no ser las asignadas a obras públicas municipales, refacciones o construcción de viviendas totalmente insuficientes, muchas veces anunciadas pero no concretadas. De allí que los planes más definidos provienen del Ministerio de Desarrollo Social, porque los millones de pobres existentes, por encima del 2001, requieren de una salida inmediata. No alcanzan asignaciones, tarjetas alimentarias, planes sociales, IFE ni tampoco ingresos universales, así la intención vaya ligada a acoplar planes con trabajo concreto como insiste el ministro Arroyo u otros voceros de las organizaciones Cayetanas o de la economía popular, adherentes del Frente de Todos, y devenidos muchos de ellos de piqueteros a funcionarios. Para muestra el reciente anuncio (Plan Potenciar Trabajo) de un fondo fiduciario para generar 4 millones de puestos, con apoyo de las estructuras gremiales como la UOCRA, Camioneros y Smata. Los recursos teóricamente saldrían de una profunda reforma impositiva que grave “las grandes fortunas, al extractivismo y a los capitales especulativos”. Una ingenuidad que ya no admite asombro, cuando el proyecto de impuesto por única vez a los millonarios aún duerme en el Congreso y cuando, por lo antedicho en relación a las condiciones de los acreedores de la deuda externa, el gobierno ha claudicado en toda la línea. Tal es el caso de la se-

vera amonestación de la ministra Bielsa a las declaraciones de Grabois por haber destacado “que se va profundizar la oleada de tomas de tierras” y condenado la “falta de decisión política”.

Lo que viene

Las condiciones inesperadas generadas por la pandemia no justifican que frente a la inmensa extensión de tierras existentes se reprima la toma de terrenos para construir techo propio. Tampoco, que siendo país productor de toneladas de alimentos se sigan reproduciendo las ollas y estigmatizando la pobreza. Que, habiendo tantos jóvenes deseosos de futuro se los persiga, desaparezcan o confinen en cárceles y correccionales. Sin generar los millones de puestos de trabajo necesarios con salarios y oportunidades equitativos, dado que no existe decisión política para afectar la riqueza del capitalismo monopólico, lo que viene son las movilizaciones en curso: de los despedidos, desocupados, trabajadores estatales, ambientalistas, intelectuales, vecinos, ocupantes de tierras, contra el gatillo fácil y por la aparición de Facundo Castro, etc. El despliegue de una militancia para que la crisis la paguen quienes la produjeron, con un programa antimperialista que apunte a conquistar soberanía y paralelamente a la recuperación de la confianza revolucionaria para luchar por la construcción de una sociedad distinta, igualitaria y justa. Eso es lo que viene.

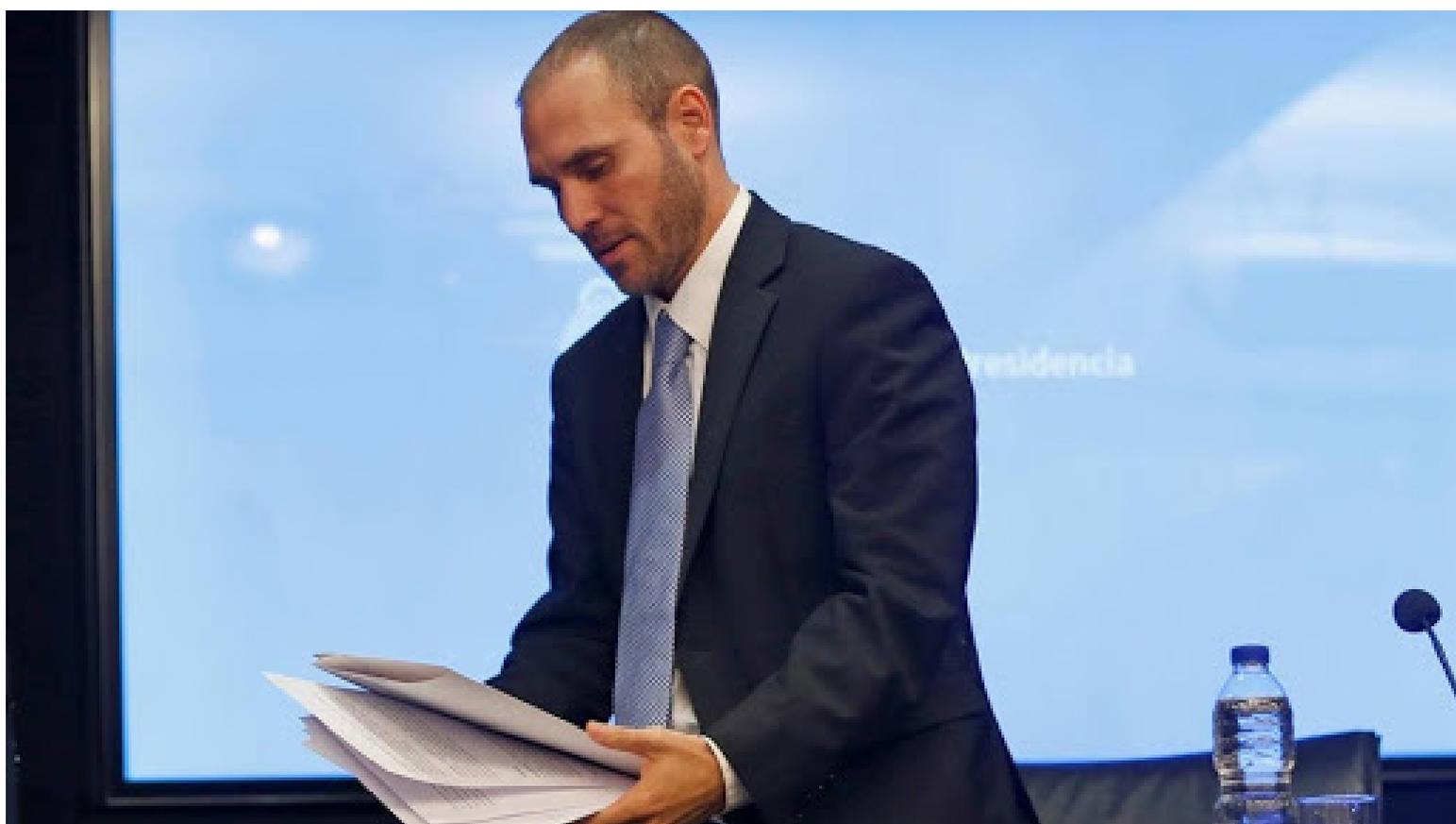
Andrés Zamponi

Acuerdo con los bonistas: nada para festejar

Más que nunca, investigar y suspender pagos

El acuerdo con los bonistas de la deuda en dólares bajo legislación extranjera (U\$S 66.200 M) constituye un capítulo más en la entrega y el saqueo del patrimonio nacional.

En lugar de aprovechar el contexto internacional para censurar a los tenedores de bonos, el origen de los fondos, la compra-venta de títulos y auditar e investigar todo el proceso de endeudamiento, la administración de Alberto Fernández optó por reconocer “a libro cerrado” el conjunto de la deuda pública central y renegociar las condiciones de pago. Acordar una reorganización de la estructura de vencimientos e intereses para volver “pagable” una deuda impagable constituye un “rescate” a los



tenedores de títulos argentinos devaluados.

El aplauso al acuerdo provino de todas partes. De la oposición, incluidos varios responsables del endeudamiento serial (Caputo, Prat-Gay, Dujovne), representando al conjunto del capital, local y extranjero. De los medios de comunicación ligados a los fondos de inversión (Clarín, Nación, Infobae). Del gran empresariado local, tenedor de bonos locales que quieren ver revaluados y, simultáneamente, temeroso de un default que lleve a sus empresas a la quiebra. Desde el gobierno, sus referentes y sus medios afines (Página/12), que vendieron un “triumfo” al público desprevenido.

El detalle del acuerdo se conocerá con la publicación de la documentación oficial. Según la información disponible, la reducción de intereses obtenida, la extensión de los plazos y un relativo “período de gracia” permiten al gobierno “festejar” por el alivio que supone a su mandato (2020 - 2023) y en menor medida, por unos años más. Eso es real: en ese sentido, resolvió transitoriamente una “crisis de liquidez”, pero a costa de una hipoteca futura (a partir de 2028). Mientras tanto, rezan por un crecimiento milagroso que cubra los pagos de deuda (volveremos sobre este punto).

En cuanto a su transcurso, la negociación giró en torno al precio de reventa de los bonos: “el gobierno ofreció U\$S 39”, “los bonistas querían U\$S 75”, “la cosa cerraba en U\$S 55”, etc. La confusión mediática generada dio lugar a un mito que debemos develar: con este acuerdo, la Argentina no pagará

U\$S 55 por cada bono, sino su valor nominal total (U\$S 100) menos la leve quita obtenida (1,9%). Es una “perinola” donde todos (los bonistas) ganan: quienes compraron al momento de su lanzamiento y quienes lo hicieron a precio de remate, cuando ya estaban devaluados por el riesgo de default. En este caso, títulos con un valor de mercado de U\$S 30, tras la renegociación se venderán por U\$S 54,8: ese “salto” en el llamado “Valor Presente Neto” (VPN) es pura ganancia para los especuladores. Aquellos que prefieran esperar al vencimiento de cada bono, recibirán el valor nominal total (U\$S 100) más los intereses correspondientes.

El precio de venta de los bonos es un reflejo de las condiciones del acuerdo. La quita de capital es insignificante (1,9%) y será compensada por la capitalización de los intereses devengados correspondientes al período de la negociación (U\$S 1.757 M). Por su parte, el recorte de intereses es más bien una adecuación de las tasas exorbitantes comprometidas por el macrismo (~6,6%) a unas más “normales” (~3%); y ni tanto, porque la tasa promedio es ~2%, en EEUU un 0,5% y en Europa el 0% ¡e incluso tasas negativas!. Es que la emisión de divisas en los países centrales durante la pandemia fue monumental (triplicó la realizada durante la crisis de 2008) y creó una época de “dinero gratis”: una sobre-abundancia de capitales que provoca disponibilidad de crédito voluntario y el desplome de las tasas de interés. Dicho sea de paso, esto abrirá un nuevo proceso de toma de crédito para

pagar la deuda reestructurada: el ciclo es permanente, inagotable.

Por otro lado, los fondos de inversión agregan determinadas condiciones legales que operan de “protección” ante futuros defaults y reestructuraciones, como elevar el porcentaje de aprobación de un hipotético nuevo canje, eliminar el piso mínimo de bonistas para reclamar pagos en tribunales internacionales o la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior. El conjunto de las condiciones obtenidas no solamente impactan en Argentina, sino que fijan la vara para la negociación de las deudas soberanas de los países dependientes a favor de los acreedores: tal fue el caso de Ecuador.

El acuerdo negociado se aplica al 20% de la deuda pública total, pero opera como testigo para la negociación de los títulos en dólares bajo jurisdicción local (U\$S 42.000 M) en manos de grandes empresas locales y fondos de inversión. Con los votos opositores incluidos, Diputados aprobó extender a los bonistas de la deuda local las condiciones favorables obtenidas por los bonistas extranjeros, sumando algunos endulzantes: bonos actualizados por inflación (CER), capitalización de intereses e igualdad de trato en futuras e hipotéticas reestructuraciones. Los paquetes de deuda restantes corresponden al Club de París (U\$S 2.000 M), organismos internacionales como el Banco Mundial, BID y CAF (U\$S 25.000 M) y a las deudas de las provincias (U\$S 28.000 M). La deuda en pesos re-

presenta una carga menos volátil, especialmente la contraída con áreas del Estado (como ANSES), pero no deja de pesar sobre el erario público. Por su parte, la negociación de la deuda corporativa (U\$S 16.000 M) será tarea de las empresas endeudadas, pero debe considerarse en el cuadro económico, porque los dólares con que se paga deberán salir del circuito económico local.

Párrafo aparte, resta la negociación con el FMI: U\$S 49.000 M entre capital e intereses. Cuando en 2018 se quebró el esquema de bicicleta financiera (*carry trade*) armado por Macri y sus secuaces, el Fondo operó como garante de la retirada de los capitales especuladores autorizando un crédito de U\$S 57.000 M en cuotas (por encima de su capacidad y potestad de préstamo, de acuerdo a sus propios estatutos): se trató del primer “rescate” a los bonistas. El segundo lo acaban de implementar Martín Guzmán y Alberto Fernández. En ese sentido, el FMI (bajo la sombra de Trump) operó como la columna vertebral de un modelo insostenible: es por ello cómplice del desfalco nacional, junto al funcionariado macrista y el propio Mauricio. Para entender la magnitud del asunto: en el período macrista se fugaron U\$S 88.000 M y se estima que el sector privado tiene atesorado el equivalente a un PBI anual afuera del sistema bancario y/o en el exterior.

Sin embargo, el gobierno se apresta a negociar con el FMI, como si la deuda contraída fuera legítima e incuestionable. La renegociación con el Fon-

do supone tomar un préstamo distinto (quizás un *Extended Fund Facility* a 10 años) para pagar los vencimientos del crédito adquirido por el gobierno de Macri (bajo modalidad *Stand By*). Es posible que, con algunos artilugios, el gobierno obtenga una ligera quita de intereses y un “período de gracia”, pero el asunto está en los condicionamientos impuestos a cambio: el FMI llega a dirigir de hecho la política económica nacional en dirección al ajuste. No solamente es su “naturaleza”, sino que se lo exigen los fondos de inversión acreedores de la deuda.

Mientras tanto, la máxima que mueve al gobierno de Alberto Fernández, postergar la deuda y crecer en el camino, es una falacia: no hay desarrollo legítimo con una estructura económica dependiente y en manos de grandes monopolios extranjeros y nacionales, basada en la explotación y exportación de commodities primarios (soja, trigo, petróleo, minería, y ahora posiblemente chanchos). Es una ilusión eso de “volver a crecer” de la mano de una clase empresaria (local y extranjera que no solamente llevó al país a la quiebra una y otra vez a lo largo de la historia, sino que ahora reclama reforma laboral y mayores subsidios del Estado (UIA) y un régimen impositivo favorable a la agroexportación (Consejo Agroindustrial). El caso de Vicentín abrió la puerta al debate sobre el origen, la propiedad y destino de las divisas en nuestro país: el acaparamiento y la fuga. Es una radiografía de la gran burguesía local, el famoso empresariado

“nacional” socio menor del capital imperialista. Simultáneamente, la deuda supone un ancla demasiado pesada para las necesidades económicas de una población con salarios miserables, despidos y una tasa de desocupación del 10%, con un índice de pobreza en torno al 50% y un cuarto de la población (12 millones) alimentada gracias a los comedores populares, entre otros índices que podrían citarse. No hay margen para exprimir a los sectores populares, y tampoco hay tolerancia a continuar siendo exprimidos.

Es urgente la suspensión de los pagos y una auditoría e investigación del proceso de endeudamiento, para determinar qué parte constituye una deuda legítima y cuál es simplemente una estafa al pueblo, pura usura. Al mismo tiempo, establecer un plan económico integral de emergencia para garantizar el bienestar popular a partir de la estatización de los recursos estratégicos, el sistema bancario y el comercio exterior y las principales fuentes de riqueza de nuestro país. En esa dirección hay que orientar las iniciativas unitarias como la que impulsa la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago y la Investigación de la deuda, que además del encuentro de las fuerzas populares, antiimperialistas y democráticas, debe apoyarse en la movilización de los trabajadores y el pueblo que enfrentan las consecuencias del rumbo económico en curso.

David Paz

Deuda y chanchos chinos: dos caras de la Argentina dependiente

En julio trascendió la noticia de un posible acuerdo entre empresas chinas y argentinas para la crianza de cerdos. Esto, que en un principio era un rumor, ya tenía como antecedente los dichos durante el mes de enero del CEO de Biogénesis Bagó, Esteban Turic: “Frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”.

China, principal productor y consumidor mundial de carne porcina, viene de lidiar con la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad hemorrágica con alto nivel de contagiosidad que afecta principalmente a cerdos y jabalíes salvajes, y que obligó a sacrificar el 55% de los chanchos del país en 2019. A pesar de no ser una enfermedad zoonótica -o sea que no se transmite de animales a personas-, desde 2018 viene siendo noticia debido a los rebrotes registrados en 51 países. Una de sus principales características es que, a pesar de que se observó por primera vez en 1921, en Kenia, aún

no existe vacuna. Por lo que la única solución es sacrificar a los animales infectados. El propio gobierno chino estima que erradicar la enfermedad demandará al menos 10 años.

Con este antecedente se dan las tratativas para convertir a la Argentina en el principal país proveedor de cerdos de China. A pesar de que al cierre de esta edición no está firmado el Memorando de Entendimiento, los adelantos que dio el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y los dichos del canciller Felipe Solá bastan para saber lo central de la iniciativa. En primer lugar, el acuerdo comercial consistiría en el desarrollo de granjas agroindustriales para la cría de porcinos a gran escala y abarcaría la cadena completa de producción: plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores, criadero a ciclo completo (ciclo de las madres y ciclo de los lechones con destino al matadero), frigorífico exportador y demás. Siguiendo la lógica de que los dólares es-



En 2019 la PPA obligó a sacrificar al 55% de los chanchos de China

tán en el campo, las inversiones que se prevén rondarían los U\$D 4 mil millones en los próximos cuatro años.

En este punto es importante señalar quiénes son los principales beneficiados de este negocio. Para China impulsar las granjas de cerdos en nuestro país significa, entre varias cosas, un mercado rentable a bajo costo. Actualmente en China por cada kilo de cerdo que se produce se gastan U\$D 2, mientras que Argentina ofrece un gasto de U\$D 0,80 por kilo. Además del interés comercial chino, se le suma el de varias multinacionales, algunas de origen argentino. Este es el caso del Laboratorio Biogénesis Bagó, mayor productor y exportador argentino de vacunas y medicamentos veterinarios. El principal accionista del Laboratorio en nuestro país es el grupo Insud -a través de su firma Chemo- que participa en diversos rubros (que van desde Le Monde Diplomatique hasta el agronegocio). El dueño y fundador de Insud es Hugo Sigman quien, según la Revista Forbes, se encuentra dentro de los 10 argentinos más ricos. Sigman además es accionista del Grupo Bioceres -junto con Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco- que en 2019 presentó el primer trigo transgénico del mundo y fue aprobado para su uso en nuestro país.

En segundo lugar, el acuerdo implica un traslado del riesgo ambiental de China a nuestro país frente al rebrote mundial de la PPA. Los riesgos que contraen la rápida propagación de la enfermedad -que llevó a países como Alemania a colocar 302 km de vallas eléctricas en su frontera con Polo-

nia para evitar los contagios- representa un riesgo para nuestro país y también para los de la región. Además, queda como interrogante una cuestión no menor: ¿quién pagará los platos rotos si se desata la PPA en Argentina?

En tercer lugar, el impulso de la producción porcina aparejaría el intercambio de investigaciones científicas y tecnología agropecuaria en el sector. Si había dudas sobre cuál era la dirección que tomaría la producción de conocimientos científicos con la gestión de Alberto, acá hay una pista. El “gobierno de los científicos” nos propone más de lo mismo: colocar a la ciencia y técnica al servicio de intereses de monopolios, multinacionales y el imperialismo. Contra esta postura es la que dio pelea Andrés Carrasco y la siguen dando cientos de científicos/as del pueblo.

Conseguir divisas cueste lo que cueste

Ahora bien, acá el tema para el gobierno es la fuente de dólares que significaría la exportación de lo que presumen 9 millones de toneladas anuales. Esto se vuelve central si tomamos en cuenta que comienza la renegociación de la deuda con el FMI y acaba de culminar la del grupo de acreedores con legislación en New York. Los chanchos chinos vienen a reemplazar, en los hechos, la promesa frustrada de Vaca Muerta. Porque más allá de las vueltas discursivas que se le intente dar, para cumplir con la deuda hace falta juntar dólares y eso tiene más sello de entrega que de soberanía nacional.

Así como el “exitoso” ciclo de desendeudamiento que se inició en 2005 provino principalmente de las divisas de la exportación de soja, hoy se proponen algo similar con la carne porcina. Aunque hay que advertir que el contexto internacional no es el mismo.

La meta del gobierno ya la dijo Solá: “Necesitamos aumentar las exportaciones en por lo menos U\$D 25.000 millones por año”. Nada nuevo de este personaje que, en 1996, como ministro de Agricultura del gobierno menemista, abrió las puertas a la introducción de la siembra directa y el monocultivo de soja transgénica, que pasó a ser la principal exportación del país ocupando el 60% de la tierra cultivable. Las consecuencias socioambientales de este paquete tecnológico las sigue pagando el pueblo.

Mientras tanto, buscan endulzar oídos con las 9.500 fuentes laborales que traería el acuerdo. Este argumento, también utilizado para justificar la profundización del modelo extractivista basado en la minería a cielo abierto y el *fracking*, es perverso. Primero porque juega con la necesidad real y alarmante de trabajo que existe en nuestro país y segundo porque se plantea como la única opción para su generación, negando cualquier posibilidad de potenciar la industria nacional y orientar la generación de trabajo en función de las necesidades populares, y no de las urgencias ajenas. Además, nada se dice sobre las consecuencias que supone la existencia de estas mega granjas en la salud de quienes trabajen en ellas y en las de toda la pobla-

ción en general.

Así como el peligro en la salud humana, el impacto socioambiental es otro tema del que nada se dice. Según anunció la Cancillería, las 25 unidades integradas se ubicarían en el NEA y NOA. El incremento del desmonte para garantizar semejante producción porcina, es casi un hecho si tomamos como antecedente lo que se hace cada vez que se avanza con el cultivo intensivo o se emprenden grandes negocios inmobiliarios. Además, hay que tener en cuenta que, solo para producir un kilo de carne de cerdo, se necesitan al menos 6.000 litros de agua. El control de los desechos es otra de las preocupaciones a nivel ambiental, además de los olores nauseabundos y enfermedades que pueda causar en las poblaciones cercanas: la producción porcina a nivel mundial es generadora del 15% de la emisión de gases de efecto de invernadero.

El agronegocio: una fiesta para los de arriba

Este acuerdo con China no hace otra cosa que profundizar la dependencia de nuestro país. Pasamos de producir soja para los chanchos chinos, a ser directamente su criadero. Lejos de ser un interés nacional, detrás de este acuerdo hay un saqueo orquestado. El negocio responde a los intereses económicos chinos y de un puñado de grandes empresas locales y fondos de inversión que están asociados a ellos. Mientras tanto, las divisas que puedan ingresar a las arcas del Estado, en concepto de retenciones e impuestos, van a engrosar

las reservas que serán utilizadas para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta. Para el pueblo quedarán las enfermedades, la destrucción y el derroche de los recursos naturales.

La aclamada soberanía alimentaria terminó siendo una bomba de humo. Más bien, el plan económico va directamente en sentido contrario: se continúa la reprimarización de la economía nacional y se aprovecha el negocio de los commodities para beneficiar al sector financiero y al monopólico.

El acuerdo de los cerdos chinos pone sobre la mesa la necesidad de la intervención popular. En estos años, fueron cientos las luchas que se dieron contra el saqueo, el despojo y la contaminación. Tenemos el antecedente de la defensa del Famatina, el logro de haber echado a Monsanto de Córdoba y la derogación de la modificación de la ley 7722 en Mendoza, entre las más destacadas. Esas luchas, antiimperialistas y antimonopólicas son las que tenemos que tomar como ejemplo en cada pelea por la soberanía de nuestro territorio y por el justo derecho a tener una vida con trabajo, sin hambre y sin contaminación.

Hay otra salida posible que empieza con el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior y de los recursos energéticos y estratégicos. Esas cuatro políticas, fundamentales para que la crisis no la pague el pueblo, son una buena vara para discutir el carácter popular o no del gobierno actual.

Martina Bas

Otra vez los Blaquier, otra vez la complicidad estatal

La empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, ya suma diez muertes obreras en lo que va de cuarentena, y en la localidad de Libertador General San Martín son más de 50 los vecinos fallecidos por Covid-19.

La provincia de Jujuy en su conjunto ha pasado rápidamente a ser uno de los puntos más críticos de la pandemia en nuestro país. Según información oficial, las camas de terapia intensiva que quedan operativas tienen un 93% de ocupación. La aclaración de “operativas” no es arbitraria. Refiere al hecho de que hay algunas salas más disponibles, pero no queda más personal de salud en condiciones de atenderlas. Esto se debe a que alrededor del 30% del personal de salud está infectado. En estas condiciones, ya es un tecnicismo debatir si



la situación está fuera de control o si faltan unos días para que lo esté.

Mientras tanto, el gobernador Gerardo Morales, al frente del COE, salió públicamente a aconsejar a la población que "...cuando están en esa situación lo primero que tienen que hacer es el antibiótico, paracetamol, y el médico inmediatamente y la azitromicina, y tener el antibiótico para ir la peleando y meterle ahí para ir la peleando porque si no, lo que estamos viendo, díganme si me equivoco, séptimo, octavo día el bicho te clava cuando te descuidás". A la mañana siguiente, la azitromicina se agotó en todas las farmacias de la capital. No solo no se hace cargo del colapso sanitario de su provincia, sino que busca taparlo promoviendo la automedicación. Esto le valió el repudio del Colegio Médico de Jujuy y una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina.

Si así piensa la principal autoridad política y máximo referente del COE provincial, no sorprende que Oscar Jayat, intendente de Libertador General San Martín -la localidad más complicada con la pandemia- insista en que el problema pasa por "la falta de responsabilidad social" de los pobladores, en quienes recaería la responsabilidad del caos sanitario que se está viviendo. En el hospital local hay 8 respiradores para casi 70 mil habitantes. Hay diversas denuncias de personas infectadas muriendo en sus casas por no tener forma de ser trasladados al centro de salud. Como en muchos lugares, la cuarentena en Jujuy se ha impuesto con la policía en las calles, a fuerza de represión. Con una

excepción: los dominios de la empresa Ledesma. El monopolio azucarero no paró en ningún momento de funcionar, salvo durante el mes que (por decisión propia) dejó de producir papel. En ese momento descontó el 30% del salario a sus trabajadores y no realizó los aportes jubilatorios. La cuarentena no se sintió nunca dentro de la empresa, que obligó a trabajar a obreros mayores de 60 años y negó licencias para todo personal de riesgo. Cuando el sindicato reclamó por la situación, la empresa respondió por escrito: "Todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de la empresa". En otras palabras, para Ledesma el Covid no existe: a laburar. Semejante impunidad no nació con esta pandemia, lleva siglos de complicidad con todos y cada uno de los gobiernos provinciales y nacionales, dictatoriales o "democráticos", la misma que fuera heroicamente enfrentada en los años '70 por Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Luis Arédez, entre otros compañeros que dejaron su vida en ello. En esta oportunidad, la arrogancia patronal ya se cargó (hasta hoy) a diez laburantes. La mayoría de ellos con edad avanzada o con enfermedades respiratorias preexistentes. Es sabido desde hace décadas que la salud respiratoria de los obreros y de toda la población de Libertador está minada por el procesamiento de bagazo de caña que hace la empresa. La responsabilidad patronal de estas muertes es innegable. Desde el gobierno municipal hasta el nacional, nadie ha dicho una sola palabra. Apenas iniciada la cuarentena, el gobierno nacio-

nal recibió una generosa “donación” de Ledesma: 2500 litros de alcohol. Inmediatamente, el Estado Nacional retribuyó el gesto con una orden de compra por 30.000 litros. Dos meses después, cuando se anunciaron los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), el monopolio azucarero estaba primero en la fila de los beneficiarios para evitar el pago del 50% del salario de sus trabajadores. Cuando se deslizó la posibilidad de imponer restricciones a los negocios de los beneficiarios, Ledesma también fue la primera en retirarse del programa. Ahora, con la baja en la venta de combustibles, y la consecuente reducción en la cuota de bioetanol (del que también es productora Ledesma), se suma el chantaje con la eventual pérdida de puestos de trabajo.

Los diez trabajadores muertos, en el marco del desastre sanitario local y provincial, son crímenes que se suman al prontuario nefasto de esta patronal genocida. Mientras persista el silencio cómplice de los gobiernos provincial y nacional, esos crímenes también serán su responsabilidad.

Ismael Bello

Quema de Humedales: Los efectos devastadores del modelo productivo

Todo el país está sacudido por el tema de la quema de las islas del humedal del Paraná. Intermittentes jornadas narradas desde el hastío por el humo que llena nuestras calles, balcones y pulmones, documentadas por fotografías sacadas desde distintos puntos de la ciudad donde se aprecia la magnitud del fenómeno en gigantescas llamaradas que se ven por la noche como nunca se habían visto. Hoy podemos confrontar con otra postal: la de más de 3000 personas llenando el puente Rosario-Victoria convocadas mediante asambleas y multisectoriales para frenar este arrebato que tiene larga data y responsables concretos.

No es una catástrofe ambiental: es el modelo productivo. En la década del 90 el menemismo dejó entrar a Monsanto y sus productos RR (*Roundup Ready*). Semillas modificadas genéticamente para resistir el agrotóxico que elimina todo otro organismo vivo. El paquete semillas más agrotóxico patentado por Monsanto, que había sido rechazado en Europa y EEUU, pasa a tener en América Latina el espacio que los monopolios necesitan para extraer sus ganancias. En poco tiempo esto trajo

aparejado una mayor concentración de la producción, la creación de pooles de siembra y la dependencia de nuestra economía de los commodities de la soja transgénica. Con el correr de los años y la profundización del modelo la extensión de la frontera sojera se tradujo en desmontes, quema de pastizales y acaparamiento de tierras que antes estaban destinadas a ganadería u otros productos agrícolas al total empleo para la siembra de soja RR. Esto implicó no solamente la suba desmedida de los productos como la carne, lácteos y harina y sus derivados sino también su concentración en una menor cantidad de monopolios que producen y comercializan estos productos. A la par de políticas que implican una valoración de la soja como producto alimentario que disfrazaba su principal destino: exportación a países que lo utilizan como forraje para la obtención de divisas en nuestro país. El modelo agroindustrial basado en el monocultivo y destinado a la exportación se consolidó con fuerza durante los años del kirchnerismo, dado que los commodities ligados a la soja tuvieron un alza en los precios y nuestro país recibía dólares que fueron empleados en estabilizar la economía a corto plazo. Con ello la frontera de soja siguió expandiéndose dejando a su paso suelos arrasados, contaminación del ambiente y envenenamiento de la población.

Los humedales del Paraná ya fueron utilizados en la década pasada para llevar cabezas de ganado. Los picos de quema de pastizales durante el 2008 movilizaron a la población y los gobiernos tuvieron

que salir a responder con proyectos de preservación del humedal. Esto quedó solo en letra muerta y hoy se refuerza la búsqueda de hacer de esas tierras el lugar preponderante para la ganadería nuevamente, con el visto bueno de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe para que los privados hagan el trabajo sucio. Quemadas continuas de los pastizales preparan el terreno arrasando a su paso con la flora y la fauna, estableciendo a futuro no solo el mejor lugar para los pastizales que engordan a las vacas sino además prometiendo la total destrucción de uno de los ecosistemas que regulan la creciente del río y absorben monóxido de carbono, entre otras funciones primordiales para la vida, para la salud de la tierra y, por carácter transitivo, de las personas que vivimos en ella.

El refuerzo de este modelo productivo que tiene sus bases en el siglo XIX cuando con orgullo nos erigimos en “el granero del mundo” -eufemismo que ya declaraba la primarización de nuestra economía al servicio de las potencias imperialistas- tiene su versión actual en un gobierno cuya preocupación principal es darle cauce al compromiso de pago de la deuda externa. Porque la contracara del modelo es no solo la organización de nuestra producción acorde a las inversiones de los monopolios y multinacionales extranjeras sino además la búsqueda de la obtención de dólares para saldar la deuda odiosa de la que somos subsidiarios con el FMI, los fondos buitres y otros organismos financieros internacionales y que determinan que la producción y toda la economía en Argentina tiene como

tarea no la salud y la alimentación de su población sino fundamentalmente el pago de enormes sumas de dinero a la especulación injusta de una deuda contraída ilegítimamente.

Para cortar con el ciclo de la dependencia hay que suspender los pagos, investigar qué parte de esa deuda es legítima y cual de ella no, para no pagar lo que no debemos con el hambre y la miseria de nuestro pueblo y avanzar en recuperar la soberanía política para poder resolver la soberanía alimentaria. Es momento de intervenir en la crisis abierta que se expresa en la mitad de la población bajo la línea de pobreza, en la precarización del sistema de salud, en el congelamiento de paritarias de todos los sectores, el hambre creciente de las barriadas populares y la destrucción del medio ambiente para poner como prioridad las necesidades populares por encima del pago de la deuda odiosa. Defender los humedales es dar una disputa abierta contra los monopolios y multinacionales que saquean nuestros recursos, enfrentar los gobiernos que erigen sus políticas sobre la base de este modelo productivo y poner sobre la mesa nuestras demandas junto al resto de los sectores populares en lucha.

María Ocampo

Justicia por Blas es desarmar a los enemigos del pueblo

El asesinato de Valentino Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba es el quinto caso de “gatillo fácil” en la provincia en lo que llevamos de cuarentena. Igual que en las otras cuatro oportunidades, el crimen sigue impune.

Sin embargo, el caso de Blas provocó una reacción que conmovió al poder político, obligó a detener a los autores materiales del asesinato y terminó tumbando a la cúpula policial en cuestión de días. El hecho de no provenir de un barrio marginado sino de una familia con algunos recursos más que las habituales víctimas de estos casos, y de haber sido acribillado en pleno centro de la ciudad, en contraste con las periferias que normalmente son el escenario de tales crímenes policiales; todo esto permitió que el caso tenga una notoriedad pública superior a la media. La convocatoria a una movilización callejera, hecha por la misma familia, puede ser el escalón a un plano superior del reclamo.



Tras la noticia del fusilamiento de Blas en pleno centro de la ciudad y la denuncia pública de sus familiares, se fueron conociendo los detalles del accionar policial, que sigue paso a paso el manual nunca escrito del procedimiento de esta institución en casos similares. Más de treinta disparos, de los cuales cuatro dan en el auto y uno, a través de la luneta trasera, en la espalda de Blas. Paso siguiente, borrar y manipular las pruebas y plantarle un arma a la víctima. Todo esto formando un escudo humano de decenas de efectivos para impedir la interferencia de cualquier testigo en el armado de la escena. Luego la confección de un relato ficcional que debe ser sostenido sin fisuras por todos los involucrados. Por último, las amenazas a todo aquel que pueda poner en riesgo la arquitectura de la impunidad, sean estos familiares de la víctima, eventuales testigos, “compañeros de la fuerza” arrepentidos, agentes judiciales que no entraron en el pacto de silencio, etc.

Esta vez existe la posibilidad de que ese pacto mafioso se rompa. Por el momento se ha cortado el eslabón débil que son los dos efectivos detenidos por haber efectuado disparos, y fruto de la presión ejercida, ha caído la cúpula de la policía provincial, como muestra de que la pestilencia es inherente a la institución y no un problema de individuos. Ninguna de estas prácticas sería posible sin la unidad ideológica interna en la policía y sin el respaldo del poder político y judicial. Las declaraciones del ministro de seguridad Alfonso Mosquera al dar de baja a la conducción policial reflejan el pesar

de tener que deshacerse de algunos de los suyos: “destacamos los servicios prestados por los oficiales superiores que cesan en sus cargos”.

Ganar las calles contra esta fuerza represiva y sus sostenes políticos y judiciales es un gran paso adelante para reforzar un punto de vista esencialmente democrático: identificar a la Policía de Córdoba como enemiga del pueblo. Parados en esa perspectiva, la lucha contra el “gatillo fácil” se hermana con el resto de las luchas obreras y populares, por una salida rebelde y callejera que barra con estas instituciones irreconciliables con los derechos del pueblo.

Leo Funes

¿DÓNDE ESTÁ FACUNDO ASTUDILLO CASTRO?



APARICIÓN CON VIDA

¡YA!

Aborto legal 2020: ¿falsas promesas?

La segunda semana de agosto en relación al proyecto de interrupción legal del embarazo -IVE-, comenzó con diversos trascendidos de fuentes allegadas al gobierno, referidos a la posibilidad de pasar la votación en el Congreso para el año próximo. Alberto Fernández puso esto en duda, pero lo cierto es que por el momento tampoco lo desmintió. Así parece que la promesa de "aborto 2020" que agitó el gobierno se va desvaneciendo y -una vez más- la posibilidad de legalizar el aborto se posterga, sosteniendo la clandestinidad como decisión política manteniendo a mujeres y personas con capacidad de gestar expuestas a muertes y secuelas en su salud. Como quedó demostrado en la lucha de la marea verde en 2018, la pobreza es sinónimo de clandestinidad e inseguridad en la práctica, aspecto que se profundizó en este contexto de crisis sanitaria como ya hemos expuesto en otros artículos. Por eso seguimos exigiendo aborto legal ya con el proyecto de la Campaña. ¡Basta de dilaciones!

Seguir pateando la legalización es seguir negando nuestros derechos y darle más fuerza a la cúpula

de las iglesia católica y de las evangélicas, para que pongan trabas en el acceso a la ILE como sucedió recientemente en CABA, o como pasa hace tiempo en otras provincias como Tucumán, o que declaren el 8 de agosto como el día de las dos vidas en Chaco avalando el aborto clandestino. Son solo algunos ejemplos para advertir que los sectores que están en contra de la legalización no se quedan de brazos cruzados y que la marea verde tiene que salir de conjunto a repudiar que sigan pateando para delante nuestro derecho.

Aborto legal 2021 es aborto clandestino 2020

En 2019 quienes ahora son gobierno, decían que había que esperar al 2020, ahora esgrimen esperar al 2021 ¿Hasta cuándo? Si no nos mantenemos firmes en nuestra lucha y en las calles en defensa de nuestra salud, por nuestros derechos, nuestras vidas y proyectos, quien sabe cuándo consideren que sea buen momento para avanzar en el Parlamento. Según los argumentos esgrimidos por el gobierno parece que legalizar el aborto vendría a meter presión al sistema de salud en tiempos donde urge la pandemia. Lamentablemente problemas de salud sobran dadas las precarias condiciones de vida del pueblo trabajador, lo que falta es el presupuesto para poder abordar todo desde la prevención hasta la asistencia. El coronavirus puso en el foco un sistema de salud vaciado y desfinanciado hace años. Las y los trabajadores de la salud vienen enfrentando la pandemia

como pueden sin reapertura de paritarias, con un bono estímulo que no llega a todos y todas, sin recambio, contagiándose y hasta muriendo porque se les niegan las licencias por factores de riesgo. Los equipos de salud que garantizan ILE, están funcionando aún en este contexto difícil y garantizando derechos. Lo hacen los y las trabajadoras ¿Por qué el gobierno decide no hacerlo? Es una definición política. Acceder a un aborto seguro en el contexto del sistema de salud no debería competirle al Covid.

Negar el debate de la legalización del aborto por la pandemia, es negar que esta práctica sigue existiendo aún en este contexto y que además como consecuencia del mismo el acceso a los efectores que garantizan ILE se hace dificultoso para las personas gestantes que quieren interrumpir un embarazo

Es negar que aún hay niñas madres en nuestro país. Una vez más, cerca del 16 de agosto Día de la Niñez, seguimos luchando al grito de #NiñasNoMadres mientras el gobierno dilata un derecho de vital importancia, porque aunque damos incesantemente la pelea por la aplicación efectiva de la ILE y la seguiremos dando, con tres causales no basta para la vida de las niñas. Más aún en este contexto de cuarentena, teniendo en cuenta que en el encierro se multiplicaron los índices de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. A esto se le suma un sistema escolar estallado, en el que la ESI quedó relegada y su ausencia pasa aún más desapercibida.

¡Aborto legal ya!

Al día de hoy ya hay un proyecto con estado parlamentario y es el de la Campaña y el debate ya lo dimos profundamente en 2018. No se trata de un problema de tiempos para el debate como dicen, sino de correlación de fuerzas y con quien, en este contexto, prefiere tensar o no el gobierno. Parece que por ahora elige no hacerlo con el Vaticano, visto los cuerdos que están transando para sortear la crisis, como ejemplos están el “Plan de Desarrollo Humano Integral” próximo a lanzarse o el apoyo recibido por parte de Francisco en el pago de la deuda externa. Tal vez el gobierno calculando costo-beneficio, evalúa que no tendrá costos por parte de un movimiento de mujeres y feminista que, por ahora, tiene en buena mayoría de su lado. La cuestión es si la marea verde se la va dejar pasar o no. Apostamos a que no y llamamos a ponernos en pie de lucha confiando en nuestra propia fuerza movilizadora y a despertar la indignación que provoca que vendan gato por liebre.

Nuestra decisión política, como parte del movimiento de mujeres y feminista, es seguir presionando, reclamando y luchando de forma integral: decimos aborto legal ya y plata para salud no para la deuda y el FMI, sino para las necesidades populares. En este camino tenemos que ir calentando motores para preparar una jornada de lucha callejera el próximo 28 de septiembre Día de Acción

Global por el Acceso al Aborto Legal.

- ¡Aborto legal ya!
- Educación Sexual Integral laica y científica en todas las escuelas y niveles educativos
- Anticoncepción gratuita en todos los efectores de salud
- Aplicación efectiva de la ILE
- #NiñasNoMadres

Julia Quinteros

Camaradas de VC ¡presentes!

Durante los meses de julio y agosto de 1978, en plena dictadura genocida, nuestro partido recibió un duro golpe represivo, al ser secuestrado un importante grupo de compañeros. Estuvieron detenidos en el CCDT El Vesubio y la mayoría permanecen desaparecidos.

El Centro Clandestino de Detención y Tortura El Vesubio estaba ubicado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, cerca de la intersección del Camino de Cintura con la autopista Ricchieri. Su exis-

tencia como centro de detención ilegal se remonta al año 1975, aunque entonces era denominado "La Ponderosa". Este CCDT dejó de funcionar y sus edificios fueron demolidos en 1978 debido a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La lista de camaradas detenidos-desaparecidos en Vesubio está integrada por Roberto Cristina, Elías Semás, Rubén Bernardo Kriscautsky, Beatriz Perosio, Héctor Cavallo, Julio Galeano, Abraham Hochman, Saúl Micflick, Ernesto Szerszewicz, Hugo Vaisman, Víctor Voloch y Luis Pérez (de quien se confirmó su muerte durante el presidio). La mayor parte de nuestros dirigentes y militantes mantuvo un correcto comportamiento, aún en esas durísimas condiciones a la que fueron sometidos. Sin embargo, sabemos que el enemigo logró sacar información. A pesar de eso, lo que sobresalió fue una actitud que resumimos en la conducta de Roberto Cristina -secretario general del partido-, quien a la hora de la tortura se le escuchó aquel grito de "¡Viva la Patria, viva la clase trabajadora, viva la Revolución!", tal como quedara registrado en los testimonios del Juicio a las Juntas.

Con la retirada de la dictadura y el regreso del orden constitucional en 1983, la lucha por el castigo a los crímenes del terrorismo Estado, contra su impunidad y por el destino de los desaparecidos



se puso a la orden del día. Desde diciembre del 83 se denunció la localización de Vesubio. Al calor de esa actividad se formó en 1984 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. De su fundación participó nuestro camarada Guillermo Lorusso, quien fue testigo en los juicios Vesubio I y II, y actualmente integra la querrela de Justicia Ya! en Vesubio III. En este “juicio en fascículos”, según las palabras de Lorusso frente al tribunal, en Vesubio I (con sentencia en 2011) y Vesubio II (sentencia en 2014), del centenar de genocidas que participaron del CCD fueron juzgados apenas once de ellos por 204 casos. Desde fin del año pasado se viene desarrollando Vesubio III con ocho imputados, que fueron los que llegaron a juicio luego de fallecimientos y declaraciones de insania, lo que llamamos “impunidad biológica”.

Aún en estas condiciones, seguiremos exigiendo la condena efectiva de cada genocida mientras quede uno sin juzgar, buscando que no queden impunes los crímenes contra el pueblo y rindiéndole homenaje a los camaradas caídos, levantando en alto sus banderas de lucha por la Revolución, la Liberación y el Socialismo.

Facundo Palacios

Internacional

¡Fuera Añez y todos los golpistas! ¡Viva la lucha del pueblo boliviano!

Se profundizan las protestas contra el gobierno golpista que encabeza Jeanine Añez. En el marco de una pandemia cada vez más fuera de control, y a la par de un abrupto derrumbe de las condiciones de vida del pueblo, el régimen de facto patea para adelante la convocatoria a elecciones presidenciales. Luego de tres postergaciones, el Tribunal Supremo Electoral fijó las mismas para el próximo 18 de octubre. Sin embargo, la paciencia del pueblo parece haber tocado un límite, y las movilizaciones ya no entran en la especulación sobre fechas de comicios, sino que van al hueso: ¡Fuera Añez! Es la consigna que unifica por abajo.

En un par de semanas se multiplicaron las protestas y bloqueos en distintos puntos del país, más de 120, encabezados principalmente por la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y en los últimos días se fueron sumando organizaciones que lucharon en la guerra del Agua de Cochabamba: la Federación Departamental de Regantes, organizaciones del Chaco Tarijeño y Ayopaya,

los Ponchos Rojos de Achacachi, La Fejuve de El Alto, organizaciones sociales de Parotani donde se encuentran sectores mineros. Buscando dividir y legitimar una eventual represión, el gobierno de facto acusa a la COB y al MAS por impedir el paso de camiones con oxígeno destinado a pacientes con coronavirus. Esto no solo ha sido desmentido en los hechos, sino que se siguen sumando sectores a las protestas.

El hecho es que la banda gobernante está sometida a la presión del imperialismo estadounidense para asegurar una continuidad del régimen con un barniz democrático, bloqueando al mismo tiempo el regreso del MAS al poder. Esta misión es cada vez más difícil, dado que requeriría unificar en una candidatura a todas las fracciones derechistas, hoy enfrentadas entre sí. Las postergaciones en la fecha de elecciones responden a la imposibilidad de tal unificación. Las previsiones indican que las elecciones hoy serían ganadas con holgura por el partido de Evo Morales, y esto es inaceptable para el elenco golpista.



En el último intento por acordar una salida, el TSE elaboró un borrador de acta de entendimiento junto a la COB y otras organizaciones sociales, donde se fija la fecha del llamado a elecciones para el 18 de octubre. Morales hizo un intento por desactivar las movilizaciones sumándose a este pacto, pero fue rechazado mayoritariamente en las asambleas que se mantienen bloqueando las principales rutas del país. El pueblo trabajador que está ganando las calles ya no confía en las promesas de los golpistas, y tiene razones de sobra para ello. La consigna que gana fuerza en los bloqueos es ¡Fuera Añez!

Este pueblo ha comprendido que no hay entendimiento posible con los asesinos de sus compañeros, y que éste nunca podría ser la base de una democracia a la medida de las necesidades populares. La gran movilización del heroico pueblo boliviano exigiendo la renuncia de Añez, es la llave para terminar con esta aventura del golpismo, tarea de primer orden para darle un golpe de gracia a la derecha rancia. En Argentina y el resto del mundo, es deber de las fuerzas antiimperialistas y democráticas apoyar la lucha popular boliviana. ¡Hasta la victoria siempre hermanos bolivianos!

Pablo R.

*¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!*